

LORENZO LAGE ESTRUGO | MARIO ROSANO ALLOZA

(EDS.)

Un milenio de globalizaciones en el Asia Central

De los albores de la Edad Media
a la contemporaneidad



Un milenio de globalizaciones
en el Asia Central

LORENZO LAGE ESTRUGO | MARIO ROSANO ALLOZA

(eds.)

Un milenio de globalizaciones en el Asia Central

*De los albores de la Edad Media
a la contemporaneidad*



EDICIONES TREA

ESTUDIOS HISTÓRICOS LA OLMEDA
COLECCIÓN PIEDRAS ANGULARES

Primera edición: abril de 2026

© de los textos, sus respectivos autores, 2026

© de esta edición:

Ediciones Trea, S. L.

C/ Gran Capitán, 52

33213 Gijón (Asturias)

Tfno. 985 303 801 · Fax 985 303 712

trea@trea.es / www.trea.es

Producción: Patricia Laxague Jordán

Maquetación: Alberto R. Torices

D. L.: AS 00871-2026

ISBN: 979-13-87790-68-4

Impreso en España. *Printed in Spain*

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo por escrito de Ediciones Trea, S. L. La Editorial, a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Índice

Introducción. Bajo el signo de Clavijo	9
Lorenzo Lage Estrugo y Mario Rosano Alloza	
1. Asia Central como laboratorio histórico de globalización.	15
Lorenzo Lage Estrugo y Mario Rosano Alloza	
2. La senda de la civilización global de Asia Central.	75
Azamat Ziyov	
3. El Turquestán en el mundo globalizado hasta comienzos del xx.	89
Vohid Yusupovich Kholov	
4. El siglo de la globalización soviética	105
Xavier María Ramos Diez-Astrain y Emanuele Treglia	
5. Asia Central: el corazón del mundo en disputa en la era de las globalizaciones	137
Raúl Ramírez Ruiz	
6. Hacia el otro lado del planeta. Relaciones entre el mundo iberoamericano y Asia Central	161
Alberto Martín Torres	
Bibliografía	185
Autores	203

El siglo de la globalización soviética

XAVIER MARÍA RAMOS DIEZ-ASTRAIN Y EMANUELE TREGLIA

En su reputada *Historia del siglo xx*, Eric Hobsbawm caracterizaba al «corto siglo xx» como aquel que ha transcurrido entre el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Unión Soviética/URSS) (Hobsbawm, 1998: 15). Efectivamente, si la llamada Gran Guerra fue el contexto que, a tres años de su comienzo, posibilitó la Revolución Rusa (1917), el devenir de las casi ocho décadas posteriores estuvo marcado de manera decisiva por la presencia y las actuaciones de la URSS y de aquel movimiento comunista internacional que, en Moscú, tuvo su cuna y epicentro. Lo han tenido claro destacados especialistas como Moshe Lewin o Karl Schlögel, que han aludido al «siglo soviético» en dos obras muy célebres (Lewin, 2006; Schlögel, 2021).

Los autores de este capítulo hemos decidido recoger el guante y examinar, precisamente, en qué términos el siglo xx estuvo condicionado por la URSS, tanto por sus acciones directas, como por las reacciones que su mera existencia y sus actividades suscitaron en un amplio abanico de sujetos sociopolíticos fuera de sus fronteras. Nuestra visión sobre estas interrelaciones parte de cómo la historiografía más reciente ha evidenciado que el comunismo no puede entenderse sin una mirada transnacional, que examine sus redes a escala global y, a la vez, su dialéctica con los aspectos específicos de las realidades locales donde surgieron sus diferentes manifestaciones (Pons, 2014; Studer, 2025).

Así, a lo largo del presente texto analizaremos en qué consistió la globalización soviética, concebida como un proyecto de globalización alternativa a la liberal, bajo múltiples puntos de vista. Veremos cómo la URSS impulsó la perspectiva de una revolución global y, para ello, promovió el surgimiento del movimiento político transnacional por excelencia del siglo pasado, es decir, el movimiento comunista internacional: un movimiento al cual los bolcheviques brindaron unas señas de identidad, unos valores, un universo simbólico y unos esquemas interpretativos comunes. Además, examinaremos la política exterior de la URSS en cuanto Estado y superpotencia de relevancia mundial que, sobre todo después

de la Segunda Guerra Mundial, pudo ejercer una influencia directa sobre un número considerable de países —especialmente en Europa Central y Oriental, pero no solo— los cuales adoptaron un sistema sociopolítico que, en buena medida, replicaba el soviético. Asimismo, prestaremos atención a las tensiones y contradicciones que se manifestaron en varios momentos entre el proyecto revolucionario global y la *raison d'État* de la URSS y, por otro lado, señalaremos cómo la globalización soviética generó temores que difundieron a escala global también el fenómeno del anticomunismo.

El impulso de Octubre

El triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 conmovió profundamente no solo las entrañas del antiguo Imperio Ruso, sino también los fundamentos del orden internacional tal como se había concebido hasta entonces. La transformación del Imperio Ruso en la URSS implicó una transformación de la presencia rusa en el mundo, tanto por el papel que la renovada potencia asumió como por la percepción que se tuvo de ella en el mundo capitalista desarrollado.

El Imperio Ruso no dio paso a la URSS de manera automática. En ese proceso mediaron una serie de hitos que redefinieron territorialmente el macro-Estado euroasiático. El primer jalón que hay que reseñar es el propio proceso revolucionario de 1917, que conllevó la fragmentación del territorio del antiguo imperio y la aparición de entidades políticas que reclamaban su autonomía o directamente su independencia. Este derecho fue reconocido por los sóviets con la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia, promulgada inmediatamente después de la Revolución de Octubre. En algunos casos, varios organismos de diferente raíz pugnarón por el control del mismo territorio (por ejemplo, en Ucrania). El segundo momento que corresponde mencionar son las negociaciones de paz de Brest-Litovsk (marzo de 1918). El tratado de paz que se firmó puso fin a la guerra de Rusia con Alemania a cambio de gigantescas pérdidas territoriales en la parte occidental, de un tercio de la población y de la mitad de la industria (Pons, 2014: 8).

Los hitos reseñados eran ilustrativos de la nueva manera que los bolcheviques tenían de entender la política internacional. Tanto el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones —al que siguió una similar profesión de fe, desde postulados liberales, por parte del presidente norteamericano Woodrow Wilson— como la priorización de la paz por encima de la integridad territorial —no sin importantes resistencias entre los bolcheviques, pese haberse dispuesto dicha prioridad, mediante un Decreto sobre la Paz, inmediatamente tras la toma del po-

der— formaban parte de una política en la que la revolución estaba totalmente por encima de las antiguas formas y fronteras estatales. La perspectiva internacionalista de Lenin y otros dirigentes del socialismo europeo —quienes, a la postre, habían protagonizado la ruptura con la socialdemocracia durante la Primera Guerra Mundial y la fundación del movimiento comunista— implicaba no considerar las fronteras como un limitante válido de la revolución. Lenin estaba convencido de que, al igual que se había producido una globalización del capitalismo, se produciría una globalización de la revolución. Coherentemente, frente a la guerra imperialista Lenin había clamado por la guerra civil revolucionaria entre el proletariado de las distintas naciones de Europa y las burguesías que lo utilizaban como carne de cañón (Pons, 2014: 3; Priestland, 2017: 151). El desprecio por los viejos aparatos estatales, una vez asumido el control del Estado en Rusia, llegaba también a la propia diplomacia, cuyos previos acuerdos secretos fueron sacados a la luz. El Imperio estaba dando paso a algo nuevo —ya se vería si un único Estado o varios Estados independientes— de carácter revolucionario e internacionalista, peligroso para el orden burgués hegemónico hasta ese momento.

Esto no pasó inadvertido para los Aliados occidentales, que, de manera simultánea a las negociaciones de Brest-Litovsk, evocando lo que en su día había ocurrido con la Francia revolucionaria, intervinieron militarmente contra la nueva revolución en suelo ruso. Este tercer hito fue paralelo al cuarto de los hitos a los que nos estamos refiriendo: el estallido de la guerra civil. Aunque este sea el nombre que ha hecho fortuna, puede ser engañoso: ni se trató de un único conflicto civil ni (como en muchos otros casos) tuvo un carácter estrictamente interno. Por el contrario, ofensiva externa y guerras civiles se entrecruzaron. Aunque la excusa del primer desembarco británico en Murmansk, en julio de 1918, fue hacer retroceder a los alemanes (pues los aliados no reconocían lo acordado en Brest-Litovsk), muy pronto se vio que la finalidad real era dirigirse a Petrogrado a combatir a los revolucionarios (Haslam, 2021: 34-35). A partir de entonces, las potencias aliadas —incluida Japón por el extremo oriental— actuaron para apoyar a diversos sectores «blancos» (contrarrevolucionarios) en su lucha contra los sóviets. La derrota alemana en noviembre de 1918 no hizo sino reforzar la actuación internacional contra el régimen revolucionario, en paralelo al recrudecimiento de las luchas en el interior.

Estas se prolongaron, con distintos grados de intensidad, hasta 1923-1926 e implicaron la muerte de 10,5 millones de personas (Rodrigo y Alegre, 2019: 135). Entre sus consecuencias no estuvo una gran desintegración territorial, dado que la victoria del Ejército Rojo fue absoluta en el ámbito interno. Pero el Ejército Rojo no pudo recuperar las repúblicas bálticas, desgajadas en Brest-Litovsk. Y, en una operación notablemente más desastrosa, tampoco pudo vencer en la guerra que mantuvo con

Polonia en 1919-1920 a cuenta del control de Ucrania, en disputa por varios contendientes (Rusia soviética, nacionalistas ucranianos, polacos, el «Ejército Negro» de Néstor Majnó, etc.) tras la derrota alemana. Tras repeler a los ejércitos polacos en suelo ucraniano, en 1920 los bolcheviques creían que podrían llevar la revolución a la propia Varsovia, donde confiaban en que el Ejército Rojo sería recibido con los brazos abiertos por el proletariado local. Empero, la resistencia férrea polaca ante lo que consideraban una vuelta del tradicional invasor ruso arrojó un jarro de agua fría sobre sus expectativas de una revolución internacional (Fitzpatrick, 2005: 93).

No se trataba de una cuestión menor. Lenin y sus camaradas estaban convencidos de la necesidad de una revolución a escala global —o, al menos, en los países europeos más desarrollados, como Alemania— que permitiese asegurar la pervivencia del proyecto que habían puesto en marcha en Rusia. Rusia era el eslabón más débil del capitalismo, lo que había posibilitado prender la mecha de la revolución, pero no era el ámbito más idóneo para fijar y liderar un modelo de transformación social marxista. Así pues, mientras se lidiaba con las dificultades internas (guerras civiles, consolidación del orden soviético, primeros pasos de la transformación económica, etc.), era una tarea capital apoyar las tentativas revolucionarias a escala global. Y Lenin no se equivocó al prever que los fenómenos de Rusia tendrían un importante eco, pero sí falló en pronosticar su desenlace. A finales de 1918 estalló la revolución en Alemania, con consejos según el modelo ruso y un fuerte liderazgo de los comunistas en Berlín. Sin embargo, fue drásticamente aplastada por una alianza de la socialdemocracia no revolucionaria (hasta hacía poco, integrante del mismo partido que los comunistas) con sectores burgueses y nacionalistas procedentes del régimen imperial. Una posterior iniciativa revolucionaria de inspiración consejista en Baviera fue derrotada también por idéntica alianza. También hubo una revolución en Hungría que fundó una «República Soviética» en 1918, pero fue brutalmente suprimida por una coalición contrarrevolucionaria (Pons, 2014: 16-17; Priestland, 2017: 194-195).

Estos estallidos revolucionarios y otros movimientos de protesta de menor entidad, que llegaron hasta latitudes muy alejadas, aunque finalmente fueron abortados, generaron un gran optimismo no solo entre los bolcheviques, sino también entre las filas de las formaciones de inspiración marxista y revolucionaria de todo el mundo. Desde 1922, sin embargo, parecía que la oleada revolucionaria estaba llegando a su fin en Europa y era necesario consolidar el poder soviético, toda vez que el Ejército Rojo estaba siendo victorioso en las guerras civiles. Ese año, cuatro repúblicas desgajadas del Imperio Ruso y controladas por sóviets a su vez dominados por los bolcheviques, firmaron el tratado fundacional de la URSS, que adoptó

su primera constitución en 1924. La Unión Soviética se veía abocada a ser el único Estado socialista en el mundo (con la excepción casi imperceptible de Mongolia) en un contexto en el que el temor —real o imaginario— a la revolución comenzaba a marcar de forma evidente la política occidental (como prueba el ascenso del fascismo en Italia a partir de 1922). La tensión entre el proyecto revolucionario global y la *raison d'État* soviética marcó desde entonces la presencia internacional no solo de la URSS, sino también del naciente movimiento comunista que estaba tomando forma en el marco de la Internacional Comunista (IC).

Esta, conocida también como Comintern o Tercera Internacional, se había fundado en marzo de 1919. Se trataba de un organismo concebido como el «partido mundial de la revolución» que, bajo la égida de Moscú, se articulaba en secciones nacionales representadas por los partidos comunistas que iban surgiendo en numerosos países (Wolikow, 2016). Su II Congreso, celebrado en 1920, tuvo una especial relevancia bajo dos puntos de vista. Por un lado, la Comintern se dotó de un aparato organizativo estable que, a lo largo de toda su trayectoria, sería dominado por destacados dirigentes del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia y, posteriormente, de la URSS: por ejemplo, los primeros presidentes de su órgano rector, el Comité Ejecutivo (CEIC), fueron Gregori Zinóviev y Lev Kámenev. Por otro lado, en el II Congreso se aprobaron las Veintiún Condiciones que los partidos comunistas necesitaban cumplir para poder ser miembros. Las secciones nacionales tenían que configurarse como grupos de revolucionarios profesionales, disciplinados y enfrentados al reformismo socialdemócrata: abogando por la dictadura del proletariado, debían combinar las actividades legales con otras de tipo conspirativo e insurreccional y denunciar la democracia parlamentaria sin dejar de participar en las elecciones allí donde las circunstancias lo permitían. Sustancialmente, se impuso a todos los partidos comunistas la adopción de un modelo que replicaba el bolchevique —algo que se acentuó ulteriormente desde 1924, con el paulatino ascenso al poder de Stalin—. Además, según la condición catorce, todos los miembros de la IC tenían la obligación de «apoyar incondicionalmente» las Repúblicas Soviéticas (Agosti, 1974: 193-209). Así, la Comintern se perfilaba como un vector clave de la incipiente globalización soviética, presentando una naturaleza dual: era una plataforma de coordinación de las actividades comunistas a escala transnacional y, al mismo tiempo, un medio que permitía a los bolcheviques ejercer su influencia sobre una amplia red de formaciones políticas diseminadas por decenas de países, que reproducían sus coordinadas ideológicas y sus señas de identidad. Esto tenía mucho sentido desde el momento en que la revolución decaía en Europa. De hecho, a partir de este II Congreso la Comintern puso el foco en la cuestión colonial, dando sustento teórico a la política de alianza con las burguesías

del lugar que los comunistas locales desarrollaron en Asia durante los años veinte y contribuyendo a exportar desde el ámbito europeo la experiencia revolucionaria soviética (Priestland, 2017: 402-404).

Así pues, desde 1920-1921, en muchos casos gracias a la acción de los emisarios cominternianos, fueron surgiendo partidos comunistas vinculados a la IC no solo en toda Europa, sino también en lugares como China o Irán, pero también Sudáfrica o el continente americano. Estas secciones nacionales, que llegarían a ser más de sesenta, tenían que someter a la aprobación del CEIC el nombramiento de sus líderes y su línea política. Precisamente para supervisar y apoyar la actividad de todos sus miembros, la Comintern se dotó de secretariados regionales encargados de distintas áreas geográficas, así como de canales informativos y organizativos que operaban en varios países en conexión con las embajadas soviéticas (Studer, 2025). Además de directrices políticas, la IC proporcionaba a sus secciones nacionales importantes recursos materiales. En 1922, por ejemplo, los comunistas alemanes recibieron 500 000 rublos, los checoslovacos 327 600, los británicos 196 560 y los italianos 155 763 (Firsov, Klehr y Haynes, 2014: 39).

Fue tomando forma de esta manera una comunidad ramificada a nivel internacional en el marco de la cual la URSS ostentaba un «carisma institucionalizado» (Albert, 2023), debido tanto a su condición de primer y único estado revolucionario comunista, como a su capacidad de configurarse como la fuente de elaboración y propagación de los valores y códigos compartidos por el nuevo movimiento que se estaba globalizando. Es cierto que los partidos comunistas no actuaban siempre mecánicamente como «agentes de Moscú» y que su creación fue estimulada también por las condiciones que se daban en sus respectivos países —por ejemplo, las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial y la consecuente radicalización de las masas en el escenario europeo, o las aspiraciones de liberación nacional en el espacio colonial—. No obstante, fueron los bolcheviques quienes les bridaron «un lenguaje político y una identidad», unos esquemas interpretativos de la realidad y unos arquetipos culturales comunes (Pons, 2014: 30).

La propia experiencia soviética adquirió pronto el carácter de un mito «capaz de proyectar» los «sueños y utopías de la militancia comunista de todo el mundo (Abad, 2021: 199). Dicho mito se cimentaba en lo que Nikolas Gvosdev ha denominado «mesianismo soviético», es decir, la autorrepresentación del Estado soviético, y su percepción por parte del conjunto del movimiento comunista, como la vanguardia portadora de una misión emancipadora y escatológica que trascendía sus fronteras, asumiendo un alcance universal (Gvosdev, 1990). El ejemplo histórico y la simbología de los bolcheviques se convirtieron en piezas centrales del imaginario, la propaganda, los discursos y las prácticas rituales de los demás partidos

vinculados a la IC que, entre otras cosas, dedicaban amplias celebraciones a la Revolución de Octubre —especialmente con ocasión de sus aniversarios— y exaltaban rutinariamente la superioridad moral y política, el genio y la heroicidad de los dirigentes de la URSS —empezando, obviamente, por Lenin—. Asimismo, los productos artísticos soviéticos, desde las películas de Serguéi Eisenstein a las novelas de Maksim Gorki, se fueron erigiendo como referentes culturales imprescindibles para los comunistas en cualquier rincón del globo (Glaser y Lee, 2020; Puigsech, 2025). Para estos, el imaginario bolchevique permeaba no solo su actividad política, sino también su vida cotidiana y sus relaciones familiares. Resulta ilustrativo en este sentido el ejemplo de un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, Villa de Don Fadrique, donde decenas de niños nacidos en los años posteriores a la Revolución de Octubre fueron inscritos en el registro civil con los nombres de destacadas personalidades de la URSS (Abad, 2021: 202). Según algunos autores marcadamente críticos, el mito soviético así conformado reproducía, con su tendencia ecuménica y su dimensión mesiánica, las dinámicas y rasgos propios de una religión en la cual, para los miembros de la Tercera Internacional, Moscú representaba la «Tercera Roma». De acuerdo con esta lectura, Lenin se configuraba como el profeta del culto, el Partido Bolchevique como el máximo administrador y guardián del corpus doctrinal, los emisarios cominternianos como los misioneros evangelizadores, las secciones nacionales de la IC como iglesias locales y los militantes de todo el mundo como los feligreses (Riegel, 2007; Furet, 1995). Aunque quizá no tenga suficiente rigurosidad analítica, esta imagen posee una llamativa carga metafórica.

Mientras tanto, como se ha mencionado más arriba, el reflujo de la ola revolucionaria en Europa hizo surgir una tensión entre la *raison d'État* de la URSS y el proyecto revolucionario global. Esta tensión se manifestó, en primer lugar, en el seno del propio Partido Comunista (bolchevique) de la URSS. El debate entre «socialismo en su solo país» defendido por Stalin, y la necesidad de la «revolución permanente», sostenida por Trotsky, fue uno de los ejes vertebradores de la disputa por el liderazgo soviético tras la muerte de Lenin (1924), que se saldó con la victoria del primero y el exilio del segundo (asesinado en México en 1940). La doctrina del socialismo en un solo país no postulaba el aislamiento de la URSS, sino la certeza de que la Unión podía consolidarse y construir el socialismo, aunque la oleada de revoluciones hubiera fracasado. Tal como se expuso en el XV Congreso del Partido, en 1927, era una estrategia que ponía el foco en el desarrollo interior, pero sin obviar el aspecto internacional: las contradicciones en el seno del capitalismo mundial —anunció Stalin— hacían previsible una crisis capitalista, la fascistización de los Gobiernos burgueses y la guerra, que era preciso alejar del horizonte inmediato. En todo caso, la URSS tenía que llevar a cabo ante todo un proceso de

state-building, como condición primordial para estar preparada en términos defensivos y de promoción de la revolución mundial; «dos caras de la misma moneda» (Pons, 2014: 61).

Las luchas internas del grupo dirigente soviético y los cambios de política de la URSS repercutieron en el movimiento comunista internacional. En la segunda mitad de los años veinte, en el marco de la persecución del trotskismo, de los organismos centrales de la Comintern fueron expulsados todos los elementos considerados «desviacionistas». Análogos procesos de «depuración» se produjeron en las secciones nacionales. A propósito de estas, cabe subrayar que, si bien en términos generales eran muy numerosas, no estaban consiguiendo dotarse de una base de masas y, en la mayoría de los países, contaban con una militancia relativamente exigua —con algunas excepciones como las de Alemania y Francia, donde tenían varios centenares de miles de adherentes—. Además, se encontraban a menudo en una situación de aislamiento político. La ambigua táctica del «frente único» impulsada por la Comintern en 1921-1922, que, si bien postulaba la búsqueda de la unidad de acción en el movimiento obrero con los socialistas, la concebía como un medio para restar a estos su influencia en el proletariado, suscitó incomprendimientos en las filas comunistas y un notable recelo en las de sus potenciales aliados. El aislamiento de los partidos de la IC en sus respectivas realidades nacionales se vio agravado desde 1928 cuando, en el VI Congreso de la Comintern, se lanzó la línea de «clase contra clase». Esta constituía el corolario de la política exterior soviética desarrollada por Stalin desde 1925, basada en la idea de relaciones profundamente antagónicas entre la URSS y los países occidentales, tachados de imperialistas y fascistas. Se trataba de una visión maniquea que ponía en el mismo plano regímenes democráticos como el francés o el estadounidense y dictaduras de derechas como la de Mussolini. La línea de «clase contra clase» trasladaba este esquema a los escenarios nacionales, llevando a los comunistas a una confrontación frontal con los partidos socialdemócratas, calificados como «el ala izquierda del fascismo». Quedaba excluida, por lo tanto, cualquier posibilidad de colaboración. Esta dinámica tuvo consecuencias trágicas; por ejemplo, en Alemania, donde la irremediable fractura entre comunistas y socialdemócratas favoreció la llegada de Hitler al poder (Pons, 2014: 73-75).

Estos problemas y reveses, de todas formas, no mermaron la cohesión del comunismo internacional, ni su sólida confianza en el papel guía de la URSS. La doctrina del socialismo en un solo país, aunque alejaba la perspectiva de la revolución global del horizonte inmediato, gracias a sus realizaciones prácticas consiguió avivar el entusiasmo del movimiento. Efectivamente, desde finales de los años veinte, mientras el mundo occidental se veía afectado por una profunda crisis eco-

nómica, la modernización estaliniana se estaba mostrando capaz de transformar a pasos agigantados una sociedad prevalentemente rural en una potencia industrial. Figuras como la del minero ucraniano Alekséi Stajánov, convertido en símbolo del ethos del «hombre nuevo» que se estaba plasmando en la URSS, ampliaron el panteón del mito soviético. Frente a un capitalismo que parecía en decadencia, el país de los sóviets se presentaba inmerso en la construcción de una «nueva civilización», lo que fuera de sus fronteras suscitó fascinación y supo cautivar el imaginario no solo de los comunistas, sino también de numerosos intelectuales progresistas como Romain Rolland o Thomas Mann —los que desde entonces serían tachados de «compañeros de viaje»—. A este propósito, cabe señalar que, en el proyectar hacia el exterior una imagen épica y mitificada del socialismo en construcción, desempeñó un papel relevante una diplomacia cultural que incluía visitas en la URSS de comunistas y personalidades extranjeras de varios tipos (desde artistas hasta científicos). Estos viajes eran cuidadosamente orquestados en base a unas «técnicas de hospitalidad», las cuales, ocultando todo aspecto negativo de la realidad soviética —in primis, los costes humanos de la modernización o la brutalidad de la represión estaliniana—, hacían que los visitantes se encontraran con una versión edulcorada e idealizada del país de los sóviets: una versión que, una vez regresados a sus países de origen, difundían a través de publicaciones o conferencias (Coeuré y Mazuy, 2012; David-Fox, 2014).

A la extensión de la influencia soviética más allá de las filas comunistas contribuyó también el desarrollo, especialmente desde la segunda mitad de los veinte, de las llamadas organizaciones auxiliares, u organizaciones de masas, de la Comintern: el Socorro Rojo Internacional, la Internacional Campesina, la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios, etc. Estas, aunque formalmente independientes, eran controladas, directa o indirectamente, por la IC. Su tarea consistía en atraer a simpatizantes y masas no afiliadas a los partidos comunistas mediante la realización de iniciativas orientadas hacia objetivos específicos que respondían a los intereses de diferentes estratos sociales. Sus actividades abarcaban un amplio abanico de ámbitos, desde el deporte y la cultura al mundo del trabajo, y llegaron a contar con la participación de destacadas personalidades como, por ejemplo, Albert Einstein y Henri Barbusse. Particular relevancia e impacto tuvo el Socorro Rojo Internacional, que llevó a cabo numerosas campañas de apoyo a presos políticos de izquierdas en varios países occidentales. Además, cabe señalar que, en 1927, se creó la Liga contra el Imperialismo, que se convirtió en la más amplia organización anticolonial del período de entreguerras. Al hacer hincapié en el nexo entre explotación capitalista y opresión colonial, permitió el establecimiento de redes transnacionales de colaboración y solidaridad entre el comunismo inter-

nacional y los movimientos de liberación africanos, latinoamericanos y asiáticos, identificando como enemigo común los sistemas burgueses e imperialistas de los países occidentales (Bayerlein, 2017; Wolikow, 2016: 47-55).

Mientras tanto, la emergente globalización soviética llevó a una globalización del anticomunismo. De hecho, el ascenso del fascismo en Italia o del nazismo en Alemania, amén de numerosas otras dictaduras reaccionarias que poblaron Europa en entreguerras, fue alimentado por una propaganda que tenía en la lucha contra el «peligro rojo» uno de sus ejes principales y, una vez llegados al poder, Mussolini e Hitler realizaron una represión sistemática de los comunistas. Pero no solo en las dictaduras reaccionarias, sino también en los países democráticos, se llevaron a cabo múltiples formas de persecución. Se puede mencionar en este sentido, por ejemplo, el caso de Estados Unidos (EE. UU.). Allí, a lo largo de los años veinte y treinta, la División General de Inteligencia del Departamento de Justicia, el FBI y las fuerzas de seguridad de los diversos estados ilegalizaron un sinnúmero de organizaciones consideradas radicales y detuvieron a miles de personas —deportándolas, en el caso de que fueran extranjeras— por el hecho de ser comunistas o simpatizantes (Goldstein, 2016).

La URSS era muy consciente del riesgo que conllevaba este auge anticomunista. En especial, la subida al poder del nacionalsocialismo en Alemania (1933) y su drástica represión sobre los comunistas supuso un importante toque de atención para la política soviética y de la Comintern. La línea de la IC se reformuló en su VII Congreso (1935): para los comunistas era el momento de articular frentes populares con partidos socialdemócratas y de la izquierda moderada, a modo de amplias coaliciones para proteger el orden democrático del auge del fascismo. El enfrentamiento anterior, basado en la mencionada línea de «clase contra clase», dio paso a una postura que apelaba a la unidad y la reconciliación (Priestland, 2017: 328-329). En virtud de esta nueva posición, en 1936 se conformaron gobiernos de frente popular en Chile, Francia y España. Además, la política exterior de Moscú viró de forma pública hacia la apuesta por la seguridad colectiva. Stalin y sus diplomáticos eran muy conscientes de la amenaza abierta que el régimen nazi implicaba para la Unión Soviética, indisimuladamente verbalizada numerosas veces y plasmada sobre el papel con el Pacto Anti-Comintern de 1936. Así, mientras internamente se preparaba para afrontar una guerra con ambiciosos planes industrializadores, externamente la URSS alineaba su política estatal con el antifascismo de la Comintern y defendía la búsqueda de acuerdos políticos con países occidentales, como Francia o Checoslovaquia (1935) (Pons, 2014: 80).

La guerra civil española (1936-1939), que estalló precisamente tras un intento de golpe de Estado contra un gobierno frentepopulista, mostró con claridad las limi-

taciones de la apuesta por la seguridad colectiva. Las dictaduras nazi y fascista se implicaron amplísimamente en apoyo del bando sublevado. En cambio, la URSS se vio prácticamente sola en su apoyo al bando republicano, ya que el Reino Unido y Francia —pese a estar gobernada también por un frente popular— impulsaron la política de no intervención. Mientras el conflicto en España fungía como una suerte de adelanto de la posterior Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales se afanaban por tratar de apaciguar las ambiciones territoriales alemanas. Pese a que la diplomacia soviética trató de alcanzar un acuerdo con los británicos y los franceses frente a Alemania, aquellos preferían pactar con Hitler la partición de Checoslovaquia (1938) y consolidar una entente anglo-alemana que ejerciese de contrafuerte contra el comunismo soviético (Haslam, 2017: 7-8). Mientras tanto, la lucha en España continuaba y convertía al país ibérico en el centro mundial del conflicto entre fascismo y antifascismo, con la Comintern como principal ente movilizador de los esfuerzos antifascistas globales, plasmados en las Brigadas Internacionales (Kirschenbaum, 2015).

Al mismo tiempo, sin embargo, la guerra civil española mostró claramente algunas dificultades y tensiones que estaban erosionando tanto las actividades, como el aparato organizativo de la IC. En este sentido, cabe destacar que las dinámicas de la «Gran Purga», que en la segunda mitad de los años treinta Stalin estaba llevando a cabo en las filas bolcheviques en la URSS, se extendieron a la Comintern, en cuyos órganos centrales y secciones nacionales se desencadenó una intensa y generalizada represión contra dirigentes y militantes acusados de oportunismo de izquierda, desviacionismo de derecha, trotskismo, etc. Estas lógicas y prácticas persecutorias, al ser aplicadas también en España en el seno de las Brigadas Internacionales, las acabaron debilitando y agudizaron las polémicas entre los comunistas y sus aliados (Chase: 2001).

La guerra civil española terminó en abril de 1939 con la victoria del bando franquista. Pocos días antes, Alemania había terminado de liquidar Checoslovaquia. El Gobierno soviético continuó intentando pactar con el Reino Unido y Francia. Pero las reticencias de estos dos países continuaban y, a la postre, fue la mano de Alemania —que, tras las garantías unilaterales dadas por los británicos a Polonia, quería asegurarse no tener un segundo frente oriental en caso de guerra— la que apareció tendida (Gorodetsky, 1990: 28). La firma de un tratado de no agresión germano-soviético el 23 de agosto de 1939 (Pacto Ribbentrop-Mólotov) fue el momento en que los intereses estatales de la URSS primaron de manera más evidente sobre otras consideraciones. La Unión Soviética y el Tercer Reich acordaban de manera pública no atacarse durante diez años. Secretamente, también se reconocían mutuamente «zonas de influencia». Polonia se configuraba como zona divisoria:

su mitad occidental quedaría, en un hipotético reparto, en manos de Alemania, mientras que la oriental acabaría bajo el control soviético, así como las repúblicas bálticas, Finlandia y Besarabia (parte de Rumanía). Las consecuencias inmediatas fueron varias. El movimiento comunista vio girar repentinamente el discurso de la URSS y la Comintern de la denuncia del fascismo a la denuncia dos bloques indistinguibles de potencias imperialistas, retomando las posturas anteriores a 1935. Fue el fin de la campaña antifascista.

Además, el pacto dio alas a Stalin para llevar adelante la anexión de varios territorios bajo su «esfera de influencia», con la tranquilidad de no confrontar por ello con Alemania: la parte oriental de Polonia en septiembre de 1939, tras la invasión nazi de la mitad occidental; Besarabia y el norte de Bucovina en junio de 1940; y Estonia, Letonia y Lituania en similares fechas, tras unos meses bajo presión. También hubo una guerra entre Finlandia y la URSS en 1939-1940, aunque la URSS, en este caso, no tuvo un desempeño exitoso. En esta política hacia sus vecinos es fácil ver que algo quedaba en la mentalidad soviética de la visión geopolítica del imperio zarista, tendente a rodear Rusia de un cinturón de seguridad, pero hay que hacer una matización: las zonas ocupadas por el Ejército Rojo no solo quedaron bajo la hegemonía de la Unión Soviética, sino que importaron su sistema social, económico y político socialista, aunque fuera impuesto desde arriba por tropas extranjeras. A su manera, esta URSS con resonancias imperiales continuaba siendo revolucionaria (Bamberg, 2015: 182-183; Haslam, 2017: 394).

Quizá por ello, Stalin se vio obligado a dar muestras de compromiso con la estabilidad del orden burgués ante los Aliados una vez que Alemania lanzó contra la URSS la Operación Barbarroja (22 de junio de 1941), en consonancia con el anticomunismo del nazismo, que solo había pospuesto su esperado ataque contra el país de los sóviets —con la finalidad también de la conquista de «espacio vital» y de nuevos recursos—. En 1939, el Pacto Ribbentrop-Mólotov había generado mucho rechazo en aquellos mismos países occidentales que, previamente, habían descartado pactar con la URSS frente a la amenaza nazi. Aun no conociendo los protocolos secretos, el Gobierno de Londres catalogó a la URSS como una «potencia hostil», en 1940 Francia declaró persona non grata al embajador soviético y, ese mismo año, británicos y franceses llegaron a plantearse bombardear los pozos petrolíferos de Bakú (Gorodetsky, 1990: 29-32). Pero, lógicamente, la invasión de la Unión Soviética —que, a la postre, conllevó la muerte de 22-27 millones de ciudadanos soviéticos y gigantescas destrucciones— obligaba a un cambio de actitud. A su vez, Moscú se esforzó por hacer ver a británicos y norteamericanos —también en la guerra desde 1941— que no representaba un peligro. Así, en 1943 Stalin decidió disolver la Comintern, cuya actividad había entrado en crisis a raíz de la «Gran Purga», de

la debacle experimentada en España por las Brigadas Internacionales y del estallido del nuevo conflicto mundial. Para el movimiento comunista internacional fue un golpe muy duro, especialmente tras la crisis de legitimidad que había experimentado a raíz del pacto de 1939. Sin embargo, la posición de la URSS como su centro y su prioridad principal continuaba todavía intacta. Todavía.

Tiempos de superpotencia

Desde la Revolución de Octubre hasta la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, a la vez que se había centrado en la configuración y desarrollo del movimiento comunista internacional, había implementado una política exterior que había oscilado entre el idealismo revolucionario y una Realpolitik pragmática, entre el enfrentamiento con los países occidentales y la búsqueda de la seguridad colectiva contra el nazifascismo. Después de 1945 estos elementos se mantuvieron sobre el tablero, pero con importantes novedades. Efectivamente, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la URSS ya no era un estado revolucionario en construcción, sino que, gracias a la modernización que había experimentado en los años treinta y al papel de primer plano que había desempeñado en el conflicto, se configuraba como una de las dos superpotencias —junto a EE. UU.— que ejercían una influencia determinante en la plasmación del nuevo orden global. Parafraseando a Isaac Deutscher (2012), había pasado del arado de madera a las centrales atómicas. Asimismo, encabezaba un incipiente «Campo Socialista» que competía con el bloque capitalista occidental liderado por EE. UU. Entre 1944 y 1949, en efecto, ocho Estados europeos reconstruyeron sus sistemas sociopolíticos en base a postulados marxista-leninistas: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, una parte desgajada de la antigua Alemania —Alemania Oriental o República Democrática Alemana (RDA)—, Rumanía y Yugoslavia. Pronto aparecieron nuevos países socialistas también fuera de Europa, como la República Popular China (1949), que en los primeros años reconoció el liderazgo soviético. Además, un apoyo decidido a diversos movimientos revolucionarios y descolonizadores extendió su influencia a una escala mundial, así como lo hizo también su política de mano tendida hacia los países que no querían alinearse formalmente con ninguno de los bloques, pero querían contrarrestar la influencia occidental y tenían, en algunos casos, proyectos internos de inspiración socialista. Precisamente, una amplia deslocalización del choque entre capitalismo y comunismo —respectiva, pero no únicamente, representados por EE. UU. y la URSS—, mientras tendía a consolidarse el statu quo europeo, fue una de las características principales de la Guerra Fría. La propia reacción antico-

munista por parte de EE. UU. y sus aliados en Europa y fuera de ella contribuyó a globalizar la importancia de la Unión Soviética. Y no se trató solo de una lucha por la influencia geopolítica. Tuvo importantes dimensiones ideológicas, culturales y económicas. Fue, en suma, un «enfrentamiento permanente y multidimensional», con diferentes momentos de conflictividad y diferentes expresiones en la esfera global (Sanz y Sáenz, 2022: 21).

El papel desempeñado por la URSS en este período ha estado en el centro de la polémica. El discurso occidental mostró a la URSS durante las décadas de la Guerra Fría como un imperio totalitario de ambiciones expansionistas que ponía en peligro las libertades políticas y económicas del mundo occidental; un temor que se acentuaba toda vez que Occidente se autopercibía en peligro de una nueva crisis como la de entreguerras (Hobsbawm, 1998: 234-235). A su vez, la URSS se presentaba a sí misma como el gran garante de la paz y del progreso social al frente del Campo Socialista regido por el proletariado, en contraposición con el Campo Imperialista occidental, regido por la burguesía y que buscaba cercar a la URSS (Pechatnov, 2010: 105). En cierto modo, estas imágenes daban continuidad a los discursos previos, pero con matices. El relato totalitarista empezó equiparando a la Unión Soviética con la Alemania nazi para terminar convirtiendo antitotalitarismo en sinónimo de anticomunismo (Traverso, 2001: 83-84). En cuanto a la autocaracterización de la URSS, representaba una innovación algo más que estilística. La doctrina de la «coexistencia pacífica» acordada por el PCUS después de la muerte de Stalin implicaba una ruptura frente a la anterior noción de la URSS como un centro revolucionario mundial, que debía forzosamente coexistir con el adversario capitalista hasta que este entrase en vía de disolución. Ahora la coexistencia se elevaba a norma general, de tal manera que la URSS se presentaba como un Estado de paz frente al imperialismo occidental (Ruiz, 2025: 5).

Hoy conviene matizar los distintos extremos. La idea occidental del totalitarismo ha sido descartada por autores como Traverso (2001: 163), precisamente, por su volubilidad y su uso interesado, que la hace «inutilizable por la historiografía», y también ha sido rechazada por especialistas en el nazismo, como Kershaw (2004: 63). Y también es evidente, tras el fin de la Guerra Fría, que la URSS no tenía una vocación agresiva y expansionista más allá de los límites de su esfera de influencia, establecida con el fin de la Segunda Guerra Mundial (Hobsbawm, 1998: 236). Pero también se ha hecho evidente que su vocación de asegurar la paz estaba alineada con unos claros fines estratégicos de índole interna y externa (Ruiz, 2025: 49-50).

Los análisis actuales oscilan entre dar un mayor o menor peso a los aspectos ideológicos y a las continuidades imperiales, pero considerando ambos elementos y rehuyendo de los enfoques puramente realistas de la Guerra Fría. Zubok (2009:

336) ha defendido que los dirigentes soviéticos buscaban convertir a la URSS en un «imperio global», utilizando formulaciones ideológicas para cubrir sus fines reales. Muchos autores coinciden con Zubok en que, efectivamente, pervivían elementos del antiguo imperialismo en la política soviética, especialmente en este período, pero no en clave expansiva. Pechatnov (2010: 92) también considera que la política soviética tenía a que ver más con una óptica imperial rusa que con la expansión mundial de la revolución, pero recalca el objetivo de la búsqueda de seguridad, sin aspirar a la hegemonía global. Por su parte, Haslam (2017: 397-398), aun reconociendo la continuidad con la lógica imperial prerrevolucionaria, pone mayor énfasis en los aspectos ideológicos. El interés propio se entrecruzaba con objetivos revolucionarios, que desde Europa se vieron desplazados al Tercer Mundo. Para Roberts (2005: 105-106) la ideología, la vocación revolucionaria, fue el factor más relevante hasta el final, ajeno a la «burda caricatura» de una URSS volcada en la dominación mundial. Además —sostiene Roberts—, la URSS se autopercebió como constantemente amenazada por el mundo capitalista y adoptaba políticas reactivas y defensivas que, en sus momentos más drásticos, buscaban forzar compromisos. Como puede verse, la dialéctica entre los objetivos revolucionarios y la herencia imperial —con su obsesiva búsqueda de seguridad ante la sensación de amenaza externa— estuvo siempre presente, en mayor o menor grado según autores, en la actuación internacional soviética.

Ciertamente, donde mejor puede apreciarse la continuidad del viejo patrón ruso es en la política soviética en Europa, aunque con importantes matices. Las conferencias de Yalta y Potsdam (1945) habían asegurado para la Unión Soviética una amplia esfera de influencia para cuando terminase la Segunda Guerra Mundial. Allá donde llegaron las tropas soviéticas, esta influencia se volvió efectiva y se implantaron sistemas socialistas acordes, en muy buena medida, al patrón soviético. En consecuencia, en el segundo lustro de los años cuarenta Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y cinco Länder alemanes, que integraron la RDA, llegaron a formar parte incuestionable de la esfera soviética, emprendiendo procesos de construcción socialista. A estos países había que sumar Albania y Yugoslavia, que fueron liberadas fundamentalmente por las guerrillas comunistas y antifascistas locales.

La instauración de las llamadas «democracias populares» encaja con los dos patrones examinados. Por un lado, era un claro acto de exportación revolucionaria, que desmantelaba el capitalismo local e integraba aquellos países en un nuevo Campo Socialista, que ahora iba mucho más allá de la URSS y la discreta Mongolia. Por otra parte, ponía una distancia efectiva entre el enemigo capitalista occidental y la propia Unión Soviética; es decir, el nuevo sistema de Estados aliados representaba

a la perfección el papel de ese glacis de seguridad que tradicionalmente había buscado Rusia. Ambas facetas se entrecruzaron. El hecho de que Stalin denegara ayuda a los comunistas locales en la guerra civil griega (1946-1949), por situarse Grecia en la órbita occidental según los acuerdos de los Aliados, evidencia la primacía de las consideraciones de seguridad por encima de una expansión de la revolución más allá de las fronteras acordadas (Sanz y Sáenz, 2022: 65). Igual conclusión puede extraerse de la apuesta estalinista por una Alemania unificada y neutral en lugar de una Alemania dividida, como la que se consolidó a partir de la fundación de la República Federal de Alemania (RFA) y de la ya mencionada RDA en mayo y octubre de 1949, respectivamente —de hecho, incluso tras la fundación de los dos Estados la URSS trató de respaldar una unificación neutral—. Ello funcionó para Austria (que, aunque no fuera socialista, a efectos prácticos integraba el ansiado cordón de seguridad) y, según parece, Stalin pensó que podía funcionar para Alemania, a costa de no extender a dicho país la revolución. Finalmente, la RDA se consolidó por la negativa occidental a dicha transacción, lo que contribuye a reforzar las tesis anteriormente expuestas sobre el carácter reactivo de la política soviética, y por el impulso de los comunistas alemanes, liderados por Walter Ulbricht (Loth, 1998: 171-177). Y esto conduce a otro punto: si bien la actuación soviética fue muy relevante en el rumbo socialista de la mayoría de los países, en Albania y Yugoslavia no lo fue en absoluto y en todos, como ha puesto de manifiesto la historiografía reciente, tuvieron más relevancia de lo que tradicionalmente se ha pensado los actores locales, cuya actuación —en distintos grados— marcó notables diferencias en los varios casos de «sovietización» (Cosovschi y Aguilar, 2024: 147). En definitiva, la URSS actuó para trasladar el sistema socialista a Europa Central y Oriental, pero no fue el único actor implicado y estuvo dispuesta a sacrificar la expansión de la revolución para garantizar un orden europeo seguro y estable.

La articulación interna del nuevo Campo Socialista pone de manifiesto que la Unión Soviética fue la potencia central y dirigente —como lo era, en conjunto, de todo el movimiento comunista—. No obstante, también ayuda a ver que las relaciones entre la URSS y las democracias populares tenían un alto componente de bidireccionalidad, aunque, con frecuencia, la Unión Soviética se reservara la última palabra y el tipo de vínculo variase dependiendo del país. Es algo que se aprecia al examinar los distintos espacios de integración que se compusieron. El primero fue la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros (Cominform), que, en cierto modo heredera de la Comintern, entre 1947 y 1956 reunió a los partidos comunistas de Europa del Este y a algunos de Europa Occidental —se volverá sobre este organismo más adelante—. El segundo espacio de integración fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica (Comecon/CAME), fundado en enero

de 1949 por la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía, y al que más tarde se incorporarían también Albania (en febrero), la RDA (1950), Mongolia (1962), Cuba (1972) y Vietnam (1978). Su finalidad consistía en coordinar los esfuerzos económicos de los países socialistas en torno a una división internacional del trabajo que asegurase la elaboración y circulación de todas las mercancías necesarias para el conjunto del bloque. Y el tercero era el Pacto de Varsovia, un acuerdo de carácter defensivo establecido en 1955 por la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la RDA y Rumanía como respuesta a la integración de la RFA en la OTAN, que implicaba el final de la expectativa de una Alemania neutral entre el este y el oeste. La presencia de tropas soviéticas estacionadas en varios países socialistas terminaba de garantizar la seguridad externa y —como se pudo comprobar en 1953, 1956 o 1968— también interna del bloque. La RDA, Polonia y Hungría tuvieron tropas de manera permanente. En la confiable Bulgaria solo permanecieron un breve lapso, entre 1944 y 1947. En Checoslovaquia se instalaron desde 1968. Por su parte, Rumanía consiguió que las tropas soviéticas abandonaran el país en 1958 (Szalontai, 2013: 309).

En el seno de los citados espacios y también en las conexiones bilaterales entre diferentes países no tardaron en verse tendencias contrapuestas e incluso enfrentamientos y puntos de fractura, lo que evidencia la complejidad de su funcionamiento y de sus relaciones internas. A raíz de las pretensiones hegemónicas que la Yugoslavia de Tito evidenció en el ámbito balcánico, amén de otras tensiones y de su resistencia a acatar sin más órdenes de Moscú tras haber liberado el país sin ayuda soviética, los comunistas yugoslavos fueron expulsados en junio de 1948 de la Cominform, tras un período de deterioro de las relaciones desde 1947, y se lanzó una feroz campaña contra el titoísmo en el movimiento comunista internacional (Cosovschi y Aguilar, 2024: 148-150). La siguiente ruptura en el seno del bloque la protagonizó Albania, tras alinearse con los comunistas chinos en su disputa con la URSS en los años sesenta. En otros países estallaron crisis que pudieron haber acabado en una quiebra, si no fuera por la intervención militar soviética. En Berlín, se produjeron amplias protestas en junio de 1953, irradiadas a otros puntos de la RDA, pero fueron drásticamente reprimidas por las tropas soviéticas estacionadas en el país. Mucho más grave fue la insurrección húngara de octubre-noviembre de 1956, que condujo al Gobierno del reformista Imre Nagy a proclamar la salida del Pacto de Varsovia y la adopción de un sistema político de democracia parlamentaria. Todavía pueden verse hoy, en los muros de los edificios de Budapest, las huellas de los combates entre las tropas soviéticas y los insurrectos, que culminaron con la restauración del orden socialista y de la fidelidad a la URSS bajo la dirección de János Kádár. La URSS estuvo a punto de hacer lo mismo en Polonia para intervenir

en una disputa entre distintos sectores en el seno del partido polaco. Doce años después, en 1968, el ejército soviético aplastó en Checoslovaquia (con la colaboración de los ejércitos búlgaro, húngaro, polaco y —externamente— germano-oriental) la llamada Primavera de Praga; un proceso de reformas democratizadoras liderado por el propio Partido Comunista de Checoslovaquia que, a juicio de Moscú, ponía en riesgo el orden socialista. Muy poco después, el líder soviético Leónid Brézhnev formuló lo que se ha conocido como «doctrina de soberanía limitada»: «cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país hacia el capitalismo, se convierten no solo en un problema del país concerniente, sino en un problema común que concierne a todos los países comunistas» (Sanz y Sáenz, 2022: 160). Era una justificación de lo ocurrido y una advertencia para el futuro. A comienzos de los años ochenta, fue Polonia el país donde más visiblemente se conmocionó el orden socialista, con la articulación del sindicato opositor Solidaridad en 1980 y la proclamación de la ley marcial en diciembre de 1981. Pero esta vez la URSS se abstuvo de intervenir militarmente, al estar concentrados sus esfuerzos militares en Afganistán y verse su potencia bélica y económica mermada (Cosovschi y Aguilar, 2024: 219).

Estas situaciones críticas reflejaban tanto la existencia de líneas de fractura en el seno del bloque socialista europeo como la disposición soviética a utilizar la fuerza, si ello se estimaba preciso. Pero también eran reveladoras de tensiones menos visibles. La instauración de las democracias populares había ido acompañada —especialmente tras la polémica con Yugoslavia— de fuertes purgas contra los sectores de los partidos comunistas defensores de vías autónomas o nacionales al socialismo. Ello aseguró una fuerte cohesión en torno a la URSS durante los últimos años de la vida de Stalin. Pero, el deceso del dictador en 1953 abrió paso a un camino intermedio —ratificado por el XX Congreso del PCUS (1956)— por el cual los Estados socialistas recuperaban buena parte de su autonomía en materia interna, siempre que no sobrepasasen determinadas líneas rojas, como la vuelta al capitalismo o el cuestionamiento del papel del partido comunista en el sistema político (Priestland, 2017: 666).

Así, florecieron diversas maneras de concebir la gestión del socialismo y políticas de espíritu nacionalista. El caso más destacado fue el de Rumanía, cuyo máximo dirigente, Gheorghe Gheorghiu-Dej, buscó legitimar el régimen socialista, con bases sociales muy endeblas, mediante una política de clara demarcación frente a la URSS —de la que la salida de las tropas soviéticas en 1958 fue una temprana demostración— y de defensa de los intereses nacionales, entre los que estaba la industrialización plena. Este «nacional-comunismo», como ha sido calificado por autores como Tismaneanu (2003: 168), fue exacerbado desde 1965 por el sucesor

de Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu, quien llegó a condenar públicamente la invasión de Checoslovaquia en 1968, pese a que Rumanía siguió formando parte hasta el final del Pacto de Varsovia y del Comecon. Precisamente, los propósitos integradores de este último organismo se vieron muy afectados por la posición rumana. La intransigencia de Rumanía ante una integración económica que enmendara sus propósitos de desarrollarse autónomamente en todos los campos obstaculizó la labor del Comecon como ámbito de articulación de las economías del bloque (Steiner, 2013: 243-244). Rumanía también obstaculizó las propuestas de consolidación institucional del Pacto de Varsovia realizadas por la URSS en los sesenta (Bílý, 2023: 19). En paralelo, la aproximación rumana a Occidente, mayor que la de cualquier otro país del bloque, acentuó esta línea independiente. Además, Rumanía protagonizó también tensiones bilaterales en el seno del bloque, como las mantenidas con Hungría con motivo del trato dispensado por Ceaușescu a la minoría húngara en el país. El ejemplo rumano, no obstante, no puede considerarse la norma: el resto de los partidos comunistas y Estados del Pacto de Varsovia se ciñeron en los grandes asuntos —política exterior, desestalinización, cambios de dirigentes, gestión de conflictos internos, etc.— a las directrices soviéticas, aunque con el tiempo su autonomía tendió a aumentar.

Como puede observarse, el liderazgo soviético del bloque socialista europeo tuvo muchos contrapuntos. Incluso sus manifestaciones más drásticas, como las ocupaciones militares de Hungría y Checoslovaquia, exigen un esfuerzo interpretativo más allá de las tesis sobre el expansionismo soviético tan típicas de la Guerra Fría. Que la URSS se arrogase el derecho a intervenir militarmente donde lo considerase oportuno dentro de su esfera de influencia revela, indudablemente, una lógica imperial. Pero no está tan claro que pueda achacarse únicamente a eso. La URSS no invadió ni Yugoslavia ni Albania, que se alejaron definitivamente del ámbito de su hegemonía, pero sin que ello implicase un abandono del orden socialista. Sí lo hizo, en cambio, en dos países —Hungría y Checoslovaquia (totalmente leal al Pacto de Varsovia)— donde el socialismo —al menos, en la versión «realmente existente» en que se conocía— se vio amenazado. Ello pone de manifiesto la intrínseca vinculación entre las maneras imperialistas de actuar y el compromiso ideológico con el proyecto comunista. Podía ser tolerable que Albania y Yugoslavia abandonasen su glacis de seguridad directo si no restauraban el capitalismo. Pero, si había posibilidades para dicha restauración, se convertía en una situación insostenible ante las que la potencia dirigente debía actuar. Era una lógica imperial en formas, pero no en trasfondo, como también evidencia el cambio en las relaciones económicas entre la URSS y las democracias populares: si en la época de Stalin la URSS drenó numerosos recursos de Europa Oriental para su reconstrucción, se

avanzó hacia una política de dependencias mutuas en la que Moscú tuvo que invertir cada vez más medios en forma de compraventas ventajosas para sus aliados. Fue una política muy cara para la URSS, que puso en muy serios aprietos económicos a las democracias populares cuando decayó en los años ochenta (Steiner, 2027: 210-211).

Y, si la realidad era así de compleja en el bloque de Estados bajo la influencia directa de la URSS, resultaba mucho más poliédrica en el seno del movimiento comunista internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, en algunos países de Europa Occidental los partidos comunistas llegaron a adquirir un carácter de masas. Fueron los casos, sobre todo, del Partido Comunista Italiano (PCI) y del Partido Comunista Francés (PCF). En 1946, en efecto, el primero contaba con casi dos millones de militantes y el segundo con aproximadamente 900 000. En la primavera del mismo año, en las elecciones constituyentes celebradas en sus respectivos países, el PCI obtuvo el 18,9 % de los votos —una cifra que se fue incrementando constantemente en las convocatorias posteriores— y el PCF el 26 %. Estos resultados se debieron, por un lado, al papel protagónico desempeñado por los dos partidos en las luchas partisanas de liberación del nazifascismo y, por el otro, a su capacidad de hacerse intérpretes de las amplias aspiraciones de renovación social y política presentes en la ciudadanía adaptando, al mismo tiempo, sus señas de identidad y sus líneas a sus realidades nacionales. Resulta ilustrativo en este sentido, por ejemplo, el hecho de que el nuevo símbolo adoptado por el PCI incluía, debajo de la hoz y el martillo, el tricolor de la bandera italiana. Así, en Francia e Italia los comunistas participaron en la elaboración de las nuevas Constituciones democráticas y tuvieron representación ministerial en los gobiernos de unidad de la inmediata posguerra. Sin embargo, de dichos ejecutivos fueron excluidos en 1947 cuando, con el comienzo de la Guerra Fría, los demás partidos que conformaban esas coaliciones se alinearon decididamente con EE. UU. (Lazar, 1992: 27-57).

Fue en este contexto, a raíz de la implementación en Europa Occidental de la doctrina de contención de la expansión del comunismo formulada por el presidente estadounidense Harry Truman, que los dirigentes de la URSS impulsaron, en el otoño de 1947, la creación de la Cominform. En el nuevo organismo, dotado de estructuras más flexibles y menos ramificadas que la Comintern, fueron integrados, aparte de los partidos comunistas de los países del llamado «socialismo real», precisamente el PCI y el PCF. De hecho, la Cominform fue concebida como un medio que, a la vez que servía para asegurar el papel dirigente y coordinador de Moscú sobre el conjunto de los partidos del naciente bloque soviético, tenía entre sus objetivos centrales el de apoyar y orientar las actividades de las dos principales formaciones comunistas de Europa Occidental. Estas, según el Kremlin, en el nue-

vo escenario de la Guerra Fría debían configurarse como «una espina en el costado del bloque occidental», usando su arraigo de masas y sus posiciones institucionales para actuar como firmes defensores y propagandistas de la política exterior de la URSS en sus países (Pons, 2014: 167). Así, el PCI y el PCF denunciaron duramente la aceptación por parte de Italia y Francia del Plan Marshall y llevaron a cabo intensas campañas de «lucha por la paz» contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el supuesto carácter agresivo del imperialismo estadounidense, en base a los axiomas fijados por la URSS descritos anteriormente (Guiso, 2007).

Entre finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, por tanto, se hicieron evidentes dos rasgos que caracterizaban, en la nueva coyuntura abierta por el estallido de la Guerra Fría, las relaciones de Moscú con el movimiento comunista internacional y, en particular, con el de Europa Occidental. En primer lugar, la Cominform no aspiraba, como sí había hecho la Comintern, a globalizar la revolución según una estrategia ofensiva dinámica, sino que optaba por una guerra de posición en cuyo marco los partidos comunistas occidentales debían contribuir a desgastar los apoyos de EE. UU. en sus respectivos países. En segundo lugar, su «vínculo de hierro» con la URSS hizo que los partidos comunistas de Europa Occidental fueran sometidos, en sus realidades nacionales, a una *conventio ad excludendum* por parte de las demás fuerzas políticas, lo que les impedía volver a acercarse al área gubernamental independientemente de su peso electoral.

Mientras tanto, el mito soviético en el seno del comunismo internacional no solo seguía intacto, sino que se había ido enriqueciendo con nuevos elementos que producían enorme fascinación incluso más allá de las filas de la militancia: *in primis*, la lucha victoriosa del Ejército Rojo contra los nazis. Asimismo, los varios partidos comunistas enviaban a sus cuadros a recibir formación en la «patria del socialismo» y obtenían de Moscú una importante financiación (Riva, 1999). Ni siquiera la denuncia de los crímenes de Stalin realizada por Nikita Kruschov en el XX Congreso del PCUS puso en discusión, a los ojos de la gran mayoría del movimiento comunista internacional, el papel de vanguardia asignado a la URSS —con la significativa excepción del Partido Comunista de China (PCCh), que se verá a continuación—. Esto fue posible porque los comunistas de todo el mundo adoptaron un esquema argumental según el cual la responsabilidad por las brutales represiones y las demás contradicciones que se habían producido durante la época estaliniana se atribuía esencialmente a la personalidad del autócrata georgiano, salvaguardando la vigencia del sistema soviético en sí (Ericse, 2016). En todo caso, poco después del XX Congreso del PCUS, Kruschov decretó la disolución de la Cominform y, a partir de ese momento, Moscú fue dejando a los varios partidos un mayor margen de autonomía para desarrollar «vías nacionales al socialismo»,

siempre y cuando demostraran sin fisuras su apoyo a la URSS. Desde entonces, las actividades de coordinación del movimiento comunista se habrían desarrollado a través de contactos bilaterales y de encuentros internacionales periódicos.

Las primeras dos Conferencias Internacionales de Partidos Comunistas y Obreros, celebradas en Moscú en 1957 y 1960, fueron protagonizadas por la creciente polémica entablada por el PCCh contra el PCUS. En términos generales, Mao Zedong, reivindicando la figura de Stalin y su legado, acusó al nuevo grupo dirigente soviético de revisionismo y de traicionar la perspectiva revolucionaria. En este marco, los puntos de fricción eran múltiples. Por ejemplo, el líder chino subrayaba la necesidad de desarrollar la lucha de clases también en el seno de las sociedades socialistas —afirmando que la URSS, al renunciar a ella, estaba sufriendo una degeneración burocrática— y consideraba que la violencia era un componente indispensable del proceso de conquista del poder y de edificación del comunismo, mientras que el PCUS, dependiendo del contexto, admitía la posibilidad de la vía pacífica. Por lo que se refería específicamente a la política exterior, el líder chino criticaba ásperamente la línea de coexistencia lanzada por Kruschov y postulaba la inevitabilidad de una guerra contra los países capitalistas, mostrándose incluso a favor de un conflicto termonuclear que hubiera eliminado a un tercio de la población mundial. Según Mao, la coexistencia suponía privilegiar la *raison d'État* soviética en detrimento de la revolución global, lo que convertía la URSS en una potencia «social-imperialista» (Radchenko, 2017). La ruptura entre el PCCh y el PCUS, que se hizo definitiva a principio de los años sesenta, tuvo consecuencias de gran calado. A nivel geopolítico, la Unión Soviética perdía como aliado el país más poblado de la Tierra, que pasaba ahora a ser su competidor, especialmente en Asia y el Tercer Mundo. Asimismo, en muchos países tanto del Norte, como del Sur Global, fueron surgiendo partidos que asumían el maoísmo como seña de identidad clave (Alexander, 2001; Wolin, 2010; Rothwell, 2013). Si bien estas formaciones tuvieron por lo general un carácter minoritario, su aparición y su posterior proliferación en el contexto del «largo 68» conllevaron el comienzo de la descomposición del movimiento comunista internacional, comprometiendo irremediabilmente su tradicional unidad.

Por su parte, el anticomunismo, que ya había emergido a nivel global en los años veinte y treinta, en el marco de la Guerra Fría experimentó un significativo desarrollo mediante el tendido de redes trasnacionales públicas y clandestinas. Toda una serie de instrumentos se pusieron sobre la mesa al servicio de la causa anticomunista: doctrinas militares, operaciones de guerra psicológica, estímulo a movimientos reaccionarios, golpes de Estado, establecimiento o mantenimiento de dictaduras, etc. EE. UU. lideró esa moderna cruzada contra el «peligro rojo».

Washington atribuyó notable importancia a la batalla en el ámbito cultural. En este sentido, impulsó iniciativas como Radio Free Europe/Radio Liberty, que transmitía propaganda estadounidense en el bloque soviético, o el Congreso por la Libertad de la Cultura, financiado por la CIA, que en los cincuenta y sesenta reunió a destacados intelectuales conservadores y de la izquierda no-comunista procedentes de Europa Occidental y Norteamérica: su objetivo consistía en librar «una lucha abierta contra las ideas marxistas y promover una fe optimista en una nueva era de democracia» y libertad que tenía como «bastión» Estados Unidos y, por extensión, la comunidad atlántica (Romero, 2017: 303).

Al mismo tiempo, Washington promovió no solo la formación de alianzas militares en función antisoviética como la OTAN y otras organizaciones similares en Oriente Medio (CENTO) y Sudeste Asiático (SEATO), sino también la creación de estructuras paramilitares clandestinas como la red Stay-behind, presente en varios países de Europa Occidental. Su rama más significativa era la italiana, la llamada Gladio. Esta, entre 1956 y 1990, constituyó un «ejército secreto» que, dotado de un centenar de depósitos de armas y de más de 600 agentes —a los que habría que sumar un número no precisado de subagentes y colaboradores—, era encargado de realizar labores de inteligencia y guerra psicológica y de poner en marcha, en el caso de que el PCI ganara las elecciones y/o llegara al poder, una operación militar de contrainsurgencia. Algunas investigaciones apuntan también a que la Gladio, en colaboración con grupos neofascistas y sectores desviados del aparato del Estado y de los servicios secretos italianos, podría haber ejecutado actividades desestabilizadoras como atentados de «falsa bandera», en el marco de la llamada «estrategia de la tensión» (Ganser, 2010).

Aparte de estas actuaciones a nivel transnacional, medidas anticomunistas fueron tomadas por prácticamente todos los gobiernos occidentales en sus respectivos ámbitos nacionales. Las que adoptó EE. UU. destacaron, una vez más, por su dureza. Solo en la primera mitad de los cincuenta, el FBI investigó alrededor de seis millones de ciudadanos, incluyendo a más de 30 000 de ellos en listas de personas que representaban un «riesgo de seguridad» y que, por ende, debían ser detenidas en caso de emergencia. Las administraciones públicas fueron depuradas de funcionarios potencialmente «desleales» y diversos centenares de despidos por presunto filocomunismo se produjeron en las universidades. A propósito del mundo de la cultura, es bien conocido el caso de la «lista negra» de Hollywood, que impidió a numerosos directores, guionistas y actores de orientación progresista encontrar empleo en la industria cinematográfica hasta entrada la década de 1960 (Fontana, 2011: 96-113). Aunque resulta aquí imposible detallar todas las persecuciones anticomunistas llevadas a cabo por los gobiernos de EE. UU. y otros países

occidentales, cabe subrayar que estas, en nombre de la defensa de la democracia contra el «peligro rojo», a menudo conllevaron serias violaciones de las libertades y derechos civiles.

La globalización de la presencia soviética —y del miedo a la misma— tuvo manifestaciones comunes y a la vez diferenciadas fuera de Europa y Norteamérica. Tras la muerte de Stalin, y una vez atemperadas las principales tensiones en el suelo europeo, el centro del conflicto capitalismo-comunismo se trasladó con fuerza al llamado Tercer Mundo. Allí, la URSS destacó por apoyar toda una serie de proyectos de liberación nacional, anticoloniales, revolucionarios y/o antiimperialistas, lo que tuvo su correlato en un apoyo occidental —sustancialmente, estadounidense— a numerosas manifestaciones anticomunistas, desde el respaldo a dictaduras reaccionarias hasta la promoción de golpes de Estado. La disputa se concretó no solo en manifestaciones bélicas abiertas como las guerras de Corea (1950-1953) y de Vietnam (1965-1975),¹ en las que ambas superpotencias tuvieron una presencia directa, sino también en otras conflagraciones que presentaron un carácter más indirecto o proxy, como la guerra de Afganistán —un atolladero para la URSS, que desplegó tropas en 1979 y las mantuvo hasta 1988— o diversas contiendas anticoloniales. La política de la Unión Soviética no siempre fue igual. En época de Stalin, el foco había estado puesto en el continente europeo y se desconfiaba de los dirigentes anticoloniales. Bajo Kruschov, la URSS optó por apoyar a un conjunto variopinto de movimientos y gobiernos antiimperialistas y nacionalistas, que entendía como potenciales aliados. Durante el liderazgo de Brézhnev, en cambio, hubo un giro, al constatar que las agendas propias de los líderes antiimperialistas no necesariamente coincidían con los objetivos soviéticos. El apoyo a las luchas en el Tercer Mundo, en consecuencia, se focalizó en los grupos típicamente marxista-leninistas (Priestland, 2017: 618-619, 659-660).

El influjo soviético en Asia y África, en todo caso, no se redujo al aspecto militar. La URSS y las democracias populares desplegaron un amplio apoyo financiero, logístico y formativo. La fundación en 1960 de la Universidad Patrice Lumumba en Moscú —un centro de educación superior dirigido ex profeso a estudiantes del Tercer Mundo— es quizás el hito más conocido de esta política, pero no fue su única faceta. En época de Kruschov, la URSS llevó a cabo una extensa «cooperación» —como se llamaba oficialmente a esta ayuda—, bajo la convicción de que los nuevos «Estados nacionales democráticos», independientes del imperialismo, podrían transitar hacia el socialismo saltándose la etapa capitalista del desarrollo

¹ La guerra llevaba desarrollándose a escala interna desde hacía una década. Pero fue en 1964 cuando, con el argumento de que había sido atacado un barco estadounidense en el golfo de Tonkin, el presidente Lyndon B. Johnson obtuvo el permiso del Congreso para actuar militarmente en Vietnam (Sanz y Sáenz, 2022: 161-162).

(Lorenzini, 2019: 42-49). Los dirigentes soviéticos confiaban en que la URSS aparecería ante los países recién independizados como un modelo de desarrollo económico rápido y eficaz. Y así fue, en parte. Algunos de esos países emprendieron rumbos de construcción socialista marxista-leninista. Otros adoptaron políticas económicas dirigistas, pero desde otros parámetros. Y muchos supieron aprovechar las posibilidades que ofrecía la competencia entre la URSS y EE. UU., que también desplegó sus propios mecanismos de ayuda e intervención, para llevar a cabo una política de equilibrios entre los dos polos que asegurase su trayectoria autónoma. La constitución del Movimiento de Países No Alineados en 1961 —en el que estaba también Yugoslavia— representó al máximo esta voluntad.

Cada continente presentó sus singularidades. En África, la experiencia soviética fue observada con amplísimo interés, hasta el punto de que alrededor de 35 Estados llegaron a proclamarse comunistas o socialistas (Drew, 2014: 286). La independencia de muchos de estos países fue liderada por grupos más o menos afines a las ideas marxista-leninistas, como fueron el caso de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique. En países previamente independizados, como Etiopía o Burkina Faso, alcanzaron el poder dirigentes inspirados por experiencias como la soviética o la cubana. También surgieron los llamados «socialismos africanos» —por ejemplo, en Ghana o en Tanzania —, que vinculaban enfoques económicos socialistas con estructuras sociopolíticas ancladas en la tradición. Las perspectivas socialistas árabes proliferaron en el Magreb —con Egipto, Argelia y Libia como los casos más destacados—, sin conexión con el marxismo, pero con importantes vínculos con la URSS.

Este socialismo árabe también tuvo mucha importancia en Oriente Próximo, especialmente en Siria e Irak, donde tomó el poder el Partido Baaz. Los gobernantes baazistas —especialmente en Irak— fueron activamente represivos con los comunistas locales, pero externamente supieron explotar los vínculos con la URSS, que era un firme aliado de la causa árabe frente a la política de expansión y limpieza étnica israelí en Palestina. Con un signo diferente, pero también parte de esas «democracias nacionales» que Kruschov consideraba que había que apoyar, estaba en el extremo oriental del continente asiático la Birmania del general Ne Win. Por supuesto, también hubo proyectos políticos de carácter propiamente marxista-leninista —además de los casos ya tratados de China y Mongolia—, que se vieron muy marcadas por la disputa sino-soviética. Particularmente destacado fue el caso de Indochina, donde el Vietnam unificado y Laos se alinearon con la URSS frente a China, que a su vez ejercía su influjo en Camboya. Lejos de reducirse a un choque discursivo, Vietnam llegó a invadir Camboya en 1978, acabando con la experiencia genocida de los jemeres rojos para instaurar otro gobierno comunista de orienta-

ción prosoviética, y al año siguiente Vietnam y China entraron en conflicto directo (Belogurova, 2014: 237-238). La URSS mantuvo también vínculos amistosos con países no socialistas, como India, que también tuvo una guerra con China.

Por lo que respecta a Latinoamérica, las circunstancias eran muy diferentes. En ese caso, se trataba de un continente previamente descolonizado, pero constantemente sometido a presiones norteamericanas. Aunque había importantes partidos comunistas en la región, no fue hasta el triunfo de la Revolución Cubana (1959) cuando la URSS tuvo una verdadera oportunidad para influir. Los revolucionarios cubanos, inicialmente defensores de un programa de espíritu democratizador y antiimperialista, evolucionaron hacia el marxismo-leninismo, entre otras cosas, ante la necesidad de contrarrestar la coacción estadounidense. La crisis de los misiles (1962), tras un intento de invasión desde suelo norteamericano un año antes, representó el punto de máxima tensión. Después, tras unos años de experimentación, la Cuba de Fidel Castro adoptó un modelo de clara inspiración soviética e incluso se integró en el CAME, pese a ser parte relevante del Movimiento de Países No Alineados. Durante los sesenta, la isla caribeña se dedicó a exportar la revolución por la vía de las guerrillas, aunque Moscú no veía factible la generalización de la experiencia cubana y prefería una vía más ortodoxa (Priestland, 2017: 644-645). A la postre, únicamente en Nicaragua triunfó, en 1979, un movimiento guerrillero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde unas coordenadas ideológicas grosso modo cercanas a la URSS. Ese mismo año, un golpe de Estado puso al frente de la pequeña Granada a un gobierno marxista-leninista, pero la experiencia fue abortada por una invasión estadounidense (1983). No hubo más experiencias propiamente comunistas en el continente, aunque sí gobiernos de izquierdas que establecieron buenas relaciones con la URSS, como el chileno de Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado que contó con el pleno apoyo de EE. UU. (1973).

Efectivamente, Latinoamérica fue un escenario en el que se manifestó en toda su crudeza aquella lógica, a la que se ha hecho referencia anteriormente, de globalización del anticomunismo y del antisovietismo impulsada desde Washington en el marco de la Guerra Fría. Allí, EE. UU. proporcionó armas, tecnología, financiación, asesoramiento y entrenamiento a fuerzas militares y paramilitares cuyas actividades se centraban en la realización de estrategias de contrainsurgencia, en la promoción de golpes reaccionarios y en la represión sistemática de personalidades y grupos de izquierdas. Esta orientación estratégica conformó lo que ha sido denominado como un «régimen interestatal Estados Unidos-América Latina» dedicado al terrorismo de Estado en función anticomunista (Menjívar y Rodríguez, 2005). En este sentido se puede mencionar, por ejemplo, la Operación Cóndor. Lanzada a mediados de los setenta, consistió en un sofisticado aparato transnacional me-

diante el cual algunas dictaduras reaccionarias latinoamericanas —principalmente Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil—, sirviéndose de recursos logísticos, económicos y de otro tipo brindados por EE. UU., rastreaban, capturaban y asesinaban a opositores políticos que habían huido al exilio. Otro caso emblemático del intervencionismo anticomunista de Washington en el centro del continente americano fue el apoyo militar y financiero suministrado, a lo largo de los ochenta, a los llamados «contras», unos escuadrones que llevaron a cabo más de un millar de ataques terroristas con el objetivo de desestabilizar y derrocar el régimen sandinista (Fontana, 2011: 503-516). Operaciones de este tipo evidenciaban cómo, para EE. UU., los imperativos anticomunistas de la Guerra Fría, vinculándose a determinadas doctrinas concernientes la seguridad nacional, prevalecían con frecuencia sobre preocupaciones relacionadas con los derechos humanos o la legalidad internacional, sentando precedentes para intervenciones y acciones encubiertas que siguen marcando los debates sobre la política exterior estadounidense en la actualidad.

Entretanto, tras la disputa sino-soviética, a finales de los sesenta nuevas posturas disconformes con la política interior y exterior de la URSS se manifestaron en el seno del movimiento comunista internacional, profundizando y ampliando su pérdida de cohesión. Un punto de no retorno en este sentido fue marcado por la invasión de Checoslovaquia, que, en 1968, puso fin al experimento liberalizador representado por la Primavera de Praga. En dicha ocasión, diversos partidos comunistas de Europa Occidental —entre ellos, el PCI, el PCF y el Partido Comunista de España (PCE)— condenaron duramente la actuación soviética, rompiendo, por primera vez de manera significativa, con la tradicional lógica de firme adhesión a la línea fijada por Moscú. Estos partidos, que llevaban unos años realizando un proceso de reelaboración de sus coordinadas ideológicas y de su praxis para hacerlas más compatibles con los sistemas de democracia liberal en los cuales se movían —en los casos de PCI y PCF— o que aspiraban a construir —en el caso del PCE—, consideraron que, para incrementar su influencia en el contexto sociopolítico de sus respectivos países y acercarse posiblemente al área gubernamental, resultaba imprescindible tomar cierta distancia de la URSS. Así, optaron por empezar a privilegiar sus exigencias nacionales en detrimento de la fidelidad internacionalista (Bracke, 2007).

En la Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y Obreros que se celebró en Moscú en junio de 1969, varios partidos —desde el italiano y el español hasta el rumano y el británico— hicieron públicas sus discrepancias con la política exterior soviética, lo que evidenció diversas fisuras y pulsiones centrífugas que iban erosionando el movimiento. De hecho, dicha conferencia fue la última en tener un

carácter global, puesto que desde entonces ya no se volvió a conseguir el consenso necesario para la organización de un evento del mismo tipo. Incluso los encuentros a escala regional que se realizaron en los setenta pusieron de relieve las notables dificultades que se presentaban a la hora de alcanzar puntos de acuerdo significativos entre unos partidos que, si bien procedían de un tronco común, estaban recorriendo caminos que se hacían cada vez más divergentes.

En este contexto, tuvo un considerable impacto el fenómeno del llamado eurocomunismo, protagonizado sobre todo por el PCI y el PCE. Estos partidos intentaron construir un nuevo tipo de internacionalismo que valoraba positivamente el proceso de integración europea y buscaba un acercamiento a la familia socialista y socialdemócrata. Al mismo tiempo, en nombre de las libertades democráticas y de los derechos humanos, fueron multiplicando sus críticas tanto hacia la política internacional del Kremlin —condenando, por ejemplo, la invasión soviética de Afganistán— como hacia el autoritarismo que caracterizaba el modelo sociopolítico vigente en la URSS y en los otros países del socialismo real —denunciando, por ejemplo, los casos de represión de los disidentes— (Treglia, 2015). Entre finales de los setenta y principios de los ochenta, el eurocomunismo experimentó su ocaso. Su apuesta por un nuevo internacionalismo no llegó a concretarse por varios motivos. Por un lado, el proyecto no logró la adhesión de los otros principales partidos comunistas occidentales, es decir, el francés —que, a pesar de haber participado en la génesis del eurocomunismo, acabó desvinculándose, entre otras razones, porque mantenía una visión negativa de la integración europea— y el portugués —que presentaba unas posturas marxistas-leninistas ortodoxas—. Por otro lado, no se consiguieron establecer colaboraciones sustanciales con las fuerzas de la Internacional Socialista, en cuyas filas la perspectiva de una aproximación a los comunistas suscitaba a priori serias reticencias. Asimismo, cabe señalar que el eurocomunismo había tomado forma en una coyuntura internacional caracterizada por una relativa distensión de las relaciones entre EE. UU. y la URSS, lo que permitía entrever la posibilidad de salir de las rígidas lógicas bipolares: sin embargo, desde 1979 esta condición de fondo vino a faltar, puesto que se asistió a una nueva agudización de las tensiones entre las dos superpotencias (se habló entonces de Segunda Guerra Fría). Además, si por su parte el PCI mantenía unas considerables cuotas electorales —por encima del 30 % en las elecciones legislativas de 1976, 1979 y 1983—, el PCE, por una compleja interrelación de factores internos y externos, sufrió un descalabro en la fase final de la Transición española (Abad García y Ramos Diez-Astrain, 2023; Donofrio, 2018; Di Maggio, 2014).

Aunque el eurocomunismo no alcanzó su objetivo de plasmar un nuevo internacionalismo, sí contribuyó significativamente a la crisis del tradicional. Efectiva-

mente, alimentó las tendencias centrífugas dentro del movimiento comunista y la pérdida de legitimidad del PCUS en su seno. Partidos como el italiano y el español se fueron dotando de unas renovadas señas de identidad que, sobre ciertas cuestiones claves —por ejemplo, la actitud a adoptar ante la democracia parlamentaria o qué tipo de relaciones mantener con la URSS—, diferían profundamente de las que se habían configurado en la época de la Comintern, poniendo de manifiesto que, como llegó a afirmar el líder del PCI Enrico Berlinguer al principio de los ochenta, la capacidad propulsiva de la Revolución de Octubre se había agotado.

Conclusiones. Ocaso y legado de la globalización soviética

A mediados de los ochenta, la URSS a nivel interno se encontraba en una situación de estancamiento, en la cual afloraban problemas económicos y crecían las presiones a favor de cambios en sentido democratizador. Asimismo, en el bloque soviético se intensificaban las demandas de plena autonomía con respecto a Moscú y se incrementaban las protestas contra el modelo sociopolítico vigente —especialmente en países como Polonia y Checoslovaquia—. Por su parte, el movimiento comunista internacional había perdido toda cohesión: había Estados socialistas desligados de o enfrentados a la URSS —China, Yugoslavia, Albania, etc.—, así como partidos comunistas occidentales que ponían en entredicho el mito soviético y, por ende, la autoridad del PCUS.

Fue en este contexto que, en marzo de 1985, llegó al poder en la URSS Mijaíl Gorbachov. El nuevo líder puso rápidamente en marcha un amplio programa de reformas internas que, anclado en el llamado «nuevo pensamiento», aspiraba a democratizar y liberalizar el sistema soviético en múltiples ámbitos, desde el económico al político pasando por el cultural. Al mismo tiempo, emprendió un nuevo rumbo en política exterior que, intencional o inintencionadamente, acabó derrumbando todos los pilares sobre los cuales se había ido construyendo la globalización soviética. Convencido de la irracionalidad de una confrontación bipolar que podía desembocar en una guerra atómica, apostó por el diálogo y la cooperación con EE. UU. y el mundo occidental (Brown, 1996). Desaparecía completamente, incluso a nivel puramente retórico, la perspectiva de la revolución global.

Moscú no solo negoció con Washington una reducción mutua de los arsenales nucleares, sino que, a partir de 1988, llevó a cabo también iniciativas de desarme unilateral y retiró sus tropas de países como Afganistán, a la vez que fue reduciendo drásticamente la ayuda económica y militar a países socialistas y partidos comunistas del espacio extraeuropeo. Se produjo así, en un lapso relativamente breve,

un repliegue de la superpotencia soviética del escenario mundial. Una dinámica similar, pero con repercusiones de envergadura aún mayor, tuvo lugar en Europa del Este. Gorbachov, en efecto, lanzó la llamada Doctrina Sinatra, que modificaba sustancialmente los vínculos con las debilitadas democracias populares al disponer que la URSS no intervendría en sus asuntos internos (lo que, a efectos prácticos, significaba dar alas a los sectores internos partidarios del cambio, que veían así alejarse la amenaza de una repetición de la invasión de Checoslovaquia). Frente a las posiciones críticas de antaño, Gorbachov, además, anunció su apuesta por una Casa Común Europea que superase la dinámica continental de bloques (Zubok, 2009: 303-335).

Cómo podrían haber sido la nueva Europa y el nuevo mundo auspiciados por el proyecto lanzado por Gorbachov en la segunda mitad de los ochenta es algo que hoy no podemos saber. Inmersa en un proceso reformista sin criterios ni rumbo claro, la URSS fue adentrándose en una senda de descomposición de su orden político, social y económico, en la que afloraron movimientos nacionalistas hasta entonces prácticamente inexistentes. A su vez, en 1989 los demás Estados socialistas europeos entraron en crisis de forma práctica sincronizada, derrumbándose de manera repentina los regímenes instaurados en la posguerra y adoptando drásticos procesos de rearticulación capitalista y transición a sistemas democráticos más o menos homologables a los occidentales. La propia URSS terminó por desaparecer a finales de 1991, tras una fallida intentona de golpe de Estado en agosto de ese año, que solo consiguió exacerbar las tensiones internas. Por entonces, muchos otros países, en distintos continentes, que se habían inspirado en el patrón soviético, optaron por dejar atrás el marxismo-leninismo. Así pues, en las campanadas que inauguraron el año 1992 el Campo Socialista y la propia URSS habían desaparecido. Su huella, empero, aún perdura.

Lo expuesto a lo largo de este capítulo ha intentado ofrecer una síntesis de la importancia global que tuvo la URSS, tanto por su propia actuación, como por la manera en la que otros actores se situaron frente a ella. Fue una dialéctica a escala mundial, en la que las expectativas emancipatorias que representaba el comunismo y la animadversión que dicho proyecto generaba pugnaron por impregnar cada espacio de disputa sociopolítica. Así, el siglo xx fue sin duda un siglo marcado por el proyecto globalizador soviético y sus confrontaciones con el capitalista.

La URSS perdió la Guerra Fría y con su desaparición se cerró el corto siglo xx. Con ella, cayó el Campo Socialista y el movimiento comunista internacional entró en una grave crisis, de tal forma que, si bien sigue existiendo, lo hace de una manera minoritaria, pluriforme y en constante tentativa de adaptación a un mundo capitalista cambiante.

Quedan cinco países vinculados al antiguo marxismo-leninismo, siguiendo la estela de la URSS: China, Vietnam, Laos, Cuba y, con enormes matices, Corea del Norte. Sus órdenes internos y su papel en la política internacional, no obstante, han cambiado mucho y apenas conservan una serie de estructuras formales del viejo cuño para albergar, en su seno, realidades muy diferentes a las del antiguo socialismo real.

Pese a todo, en cierto modo parece seguir vivo el legado de la URSS. No solo —evidentemente— porque el resultado de muchas de sus actuaciones sigue presente, sino también porque la Revolución de Octubre y su devenir continúan impregnando, con sus símbolos y aspiraciones, el imaginario global. La Rusia actual apela al pasado soviético en clave nacionalista. Simultáneamente, numerosos movimientos de corte reaccionario denuncian constantemente la existencia de una amenaza totalitaria comunista. China reivindica su modelo socialista como una fórmula de progreso superior a la del hoy debilitado Occidente, aunque lo hace incorporando, sobre todo en el ámbito económico, unos elementos que se distancian claramente de los originarios marxista-leninistas y maoístas. En suma, de alguna manera la pasada existencia de la URSS sigue estando muy presente. Lenin no logró la revolución mundial, pero, sin duda, marcó de manera profunda la historia del mundo.

Durante siglos, Asia Central ha sido un espacio clave donde distintas culturas, imperios y rutas comerciales han contribuido a dar forma al mundo. Desde la expansión del islam hasta las tensiones geopolíticas contemporáneas, pasando por las redes de la Ruta de la Seda, las conquistas mongolas y la experiencia soviética, la presente obra traza la historia de una región dinámica y en constante transformación. Fruto de un trabajo de reflexión colectiva, aunque integradas por miradas que responden a tradiciones historiográficas, marcos conceptuales y contextos académicos heterogéneos, sus páginas cuestionan la idea de globalización como fenómeno exclusivamente moderno para mostrar cómo, desde hace más de mil años, esta enorme extensión de territorio ha sido uno de sus motores fundamentales.



UCA

Centro Universitario
Internacional para Europa
del Este y Asia Central

